

Confederación

Un periodo carente de diálogo

Durante el curso que ahora termina, la acción sindical en nuestro país se ha caracterizado fundamentalmente por: la celebración de las elecciones sindicales y la negociación colectiva, procesos que, a estas alturas, permanecen sin cerrar.

De todos es sabido que las elecciones sindicales se celebran cada cuatro años y que del resultado de las mismas deriva la representación de cada sindicato en las diferentes mesas de negociación, así como en los diferentes órganos de participación institucional. Es por ello que los diferentes sindicatos prestan notable atención al proceso electoral y es también por esta: razón por la que importa, y mucho, que dicho proceso sea todo lo transparente y democrático que se requiera, para que los resultados que arroja sean fiel reflejo de la voluntad de los trabajadores.

En consecuencia con lo anterior, a nadie puede sorprenderle que durante la práctica totalidad del primer trimestre del curso, la principal tarea abordada fuera la de las elecciones sindicales.

Pero, como ya se indicó, la otra gran tarea vino dada por el proceso de negociación colectiva, proceso que se iniciaba, de hecho en los primeros días de septiembre, para los empleados públicos y que se encuentra aún en pleno apogeo para el resto de los trabajadores.

¿Cómo se ha desarrollado? Si hacemos un breve recorrido en el tiempo al que nos venimos refiriendo, concluiremos que hubo una notable falta de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.

Los pretextos que aquel utilizó fueron distintos. Así, cuando se iniciaba la negociación en la Mesa General de la Función Pública (inicio que coincidía con el estreno del derecho a la negociación colectiva de los funcionarios), el Gobierno adoptó una postura intransigente en la práctica totalidad de los puntos que conformaban la plataforma unitaria de los sindicatos, amparándose en la situación de crisis que se había creado tras la invasión de Kuwait por Irak. Esta situación derivó en que el Gobierno no tuviera seguridad en los diferentes escenarios presupuestarios que manejaba y ello abortó cualquier explotación seria en aquellos puntos que requerían algún tipo de cuantificación. A esto hubo que añadirle la situación de parálisis generada cuando los rumores de crisis de gobierno se acentuaron y que, como todos saben ya, tuvo una alargada gestación que cristalizó en una importante remodelación ministerial, en la cual el rasgo más destacable es el reforzamiento de los que diseñaban y diseñan la política económica.

Así pues, despejadas las interrogantes que la guerra del golfo había planteado y que, como se ha podido ver, desde el punto de vista económico eran excesivamente alarmistas en cuanto se refiere a las consecuencias esperadas para las economías occidentales, y despejadas las dudas en torno a la composición del nuevo gobierno, y celebradas las EE.SS., aunque sin conocer todavía los resultados de las mismas, se abordó la fase más importante de la negociación colectiva.

Esta fase se ha venido mostrando especialmente conflictiva debido a la consabida cantinela de los poderes económicos de achacar las dificultades para reducir la inflación a los costes laborales, y la incapacidad de los mismos para abordar un proceso amplio de negociación que atendiera otros aspectos diferentes de los estrictamente salariales y que permitiera abordar, en condiciones óptimas, la necesaria negociación que sobre la PSP ha de darse y constituye, a mi entender, una de las piezas claves para lograr que la puesta en marcha del mercado único no se haga de forma traumática.

¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Podrían extraerse consecuencias de distintos tipos. No obstante, me interesa señalar algunos que muestran claramente cómo no abordar de forma seria el diálogo con las organizaciones sindicales origina situaciones y costes que repercuten negativamente sobre los ciudadanos en general.

Esta afirmación puede comprobarse a través del retraso que experimentan determinadas modificaciones necesarias en el seno de las diferentes administraciones públicas y cuyo efecto no es otro que abundar en la mala imagen que, sobre las mismas, sigue teniendo la ciudadanía.

De la misma forma puede observarse cómo aumenta la crispación social debido a que las reivindicaciones, totalmente justificadas de los trabajadores, no encuentran correspondencia por parte, sobre todo, de los gerentes de las empresas públicas, que, en esta ocasión, se están convirtiendo en arietes voluntarios de una determinada política económica que, en cuanto a la limitación salarial «aconsejada», está siendo, en la práctica, abandonada por importantes sectores de la patronal. Ello ha dado lugar a una serie de movilizaciones que han afectado (como no podía ser menos) al normal desarrollo de las actividades en distintos lugares, originando los consiguientes costes que estas situaciones producen y, lo que es más importante, generando un clima que no es precisamente el más propicio para encarar los retos del futuro inmediato que nos aguarda.

En estas circunstancias y en estos momentos, con semejantes antecedentes, uno no puede dejar de ver con cautela las pretensiones formuladas sobre el denominado plan de competitividad.